

SESIONES ORDINARIAS

2012

Supl. (2) al Orden del Día N° 288

SUMARIO: **Observaciones** formuladas al dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda contenido en el Orden del Día N° 288. **Ocaña.** (17-D.O.-2012.)

Buenos Aires, 26 de abril de 2012.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Julián A. Domínguez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, 2° párrafo, del reglamento de esta Honorable Cámara, vengo a formular observaciones al dictamen de las comisiones de Energía y Combustible, Asuntos Constituciones y Presupuesto y Hacienda correspondiente al proyecto expediente 29-S.-12.

Ante todo, es preciso destacar que cualquier reforma que verse sobre una materia esencial para la política energética como es la nacionalización de Yacimiento Petrolíferos Fiscales requiere de un debate en serio en el Congreso de la Nación.

El proyecto de ley venido en consideración del Poder Ejecutivo ha sido aprobado por el Senado casi en forma simultánea con su ingreso por mesa de entradas, sin someterse al mínimo debate y con la única alternativa de su aprobación “a libro cerrado”.

Considero que estas reformas “atropelladas” y “parciales” en nada contribuyen a la calidad democrática.

Se pretende asumir el control de una empresa sin conocer cuál es su situación patrimonial y financiera, sin efectuarse *due diligence*, procedimiento básico que lleva adelante hasta el comprador más inexperto.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional adolece de graves deficiencias producto del apresuramiento en su confección y tratamiento.

La ley en discusión resulta una medida parcial y débil. Se alega la promoción y recuperación de la soberanía hidrocarburíferas de la República Argentina pero, sin embargo, no se altera en lo más mínimo el sistema

de concesión de áreas de explotación y permisos de exploración existente en la actualidad.

La ley debería, como punto previo, fijar la realización de una auditoría integral de las reservas de hidrocarburos a fin de establecer, conforme lo propuesto en el proyecto de ley presentado por el diputado Fabián Rogel, los reales niveles de reserva sin depender de lo informado por las empresas de explotación, las cuales poseen intereses en alterar la información sobre las mismas.

Debería contemplarse la creación de una comisión bicameral con facultades para auditar los niveles de inversión de las empresas que poseen concesiones de áreas y permisos de explotación a fin de evaluar si han cumplido con los compromisos asumidos y, en caso de incumplimiento, declarar la caducidad automática de los acuerdos y/o convenios oportunamente celebrados.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo sólo provocó un cambio en la tenencia del paquete accionario de YPF S.A. sin que ello resulte una verdadera recuperación de la soberanía alegada. El Estado nacional es socio mayoritario, pero socio al fin de una empresa privada donde inexplicablemente el Grupo Petersen sigue asociado y sentado en la mesa del directorio. Es inocente pensar que los españoles son sólo responsables de los malos resultados.

Sin perjuicio de lo expuesto, y con el objeto de alcanzar la verdadera soberanía en materia de hidrocarburos, el proyecto debe contemplar la creación de una empresa nacional gestionada e integrada en un 100 % de sus acciones clase “D” por el Estado nacional y todas las provincias y no sólo por las provincias petroleras. Ello afianzaría la verdadera naturaleza federal de los recursos de gas y petróleo.

La ley debe contemplar la intervención de la Auditoría General de la Nación para asumir el rol de oficina técnica competente en los términos del artículo 13 de la ley 21.499, juntamente con el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Compartiendo lo propuesto por el diputado Rogel, se deberá prever la creación de una comisión bicameral con facultades de auditar el cumplimiento del plan de inversión de las concesiones otorgadas desde el año 1990, y en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, proceder a su revocación.

La ley enviada por el Poder Ejecutivo en la redacción de su artículo 9° contiene una trampa para las provincias. Se habla de la cesión de los derechos políticos y económicos de las acciones expropiadas a favor de las provincias, pero la cesión incluye de manera obligatoria la celebración de un pacto de sindicación para ejercer en forma unificada los derechos accionarios por 50 años.

No debemos engañarnos, es el Estado nacional quien fijará e impondrá las condiciones del voto a las provincias y los términos del pacto de sindicación. En los hechos las provincias serán nominalmente tenidas en cuenta. Se pretende mostrar un federalismo que en los hechos no se materializará: se le da al Estado nacional un cheque en blanco.

Deberá designarse a la Auditoría General de la Nación, órgano de fiscalización externo de YPF en resguardo del patrimonio estatal mayoritario, sin perjuicio de la fiscalización establecida por la ley 19.550.

María G. Ocaña.

volver a O.D.